PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Quito, 29 de diciembre de 2009.- Las 12h00.- **VISTOS:** Avocamos conocimiento del sumario administrativo **Nro. OF-053-09-SG**, iniciado en contra de los señores: Abogadas Zoila Alvarado y Dora Vargas, Jueza y Secretaria del Juzgado Cuarto de Garantías Penales del Guayas. Abogados Carlos Luis Ortega, Marco Quimi Villegas y Faustino Castro Tobar, Juez y Conjuces respectivamente, de la Primera Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas. Abogados Edgar Salazar Vera y Luis Santana Benavidez, Jueces Décimo y, Segundo respectivamente, de Garantías Penales del Guayas; y, Abogado Galo Almeida Tapia, Juez Suplente del Juzgado Octavo de Garantías Penales del Guayas; doctores, Víctor Guilcapi Camacho, Humberto Rodríguez y Joel Arias Vélez, Jueces de la Corte Provincial de Esmeraldas; abogados Jacinto Rivera Jiménez, Eugenio Gijón y doctor David Valencia Rosales, Conjuces y Secretario Relator de la misma Sala, sobre la base del auto dictado por el Coordinador Nacional de la Unidad de Control Disciplinario con fecha 6 de noviembre de 2009 a las 17h00 (fs. 6-8), en cumplimiento de lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 6 de noviembre de 2009, en la que se aprueba el contenido del Memorando No. 002-CNJ-JV-TC-2009, resolviendo, se inicie de inmediato, un sumario administrativo de oficio, por las posibles responsabilidades atribuibles a los servidores de la Función Judicial antes indicados, por la caducidad de la prisión preventiva que ha operado en el juicio denominado "Huracán de la Frontera", que tuvo su origen en la diligencia de allanamiento a la finca ubicada en el cantón San Lorenzo, Provincia de Esmeraldas, sector Campanitas, ribera del río Mataje, coordenada cero un grado 23 minutos dieciséis segundos norte y 86° 46 minutos 29 segundos Oeste, en cuya diligencia se han encontrado aproximadamente 4.5 toneladas de una sustancia que posteriormente se identificó como cocaína; proceso en el que se ha producido la caducidad de la prisión preventiva de los procesados.- Notificados los servidores sumariados, contestan en el siguiente orden: **a)** Ab. Eugenio Jijón Guerrero, Conjuez de la Corte Provincial de Esmeraldas (fs. 31) manifiesta: Que dentro del proceso No. 27.972 y en su calidad de Conjuez, el mismo día que ha llegado el proceso de San Lorenzo, esto es el día 4 de septiembre de 2009, ha puesto en conocimiento de las partes y recurrentes, para que fundamenten los recursos de nulidad interpuestos; que desde esta fecha, no ha actuado, sino hasta el 19 de octubre de 2009, en que se le ha encargado el despacho del doctor Humberto Rodríguez, quien ha solicitado licencia médica, hasta el 29 del mismo mes y año. Agrega, que una vez que el abogado Víctor Guilcapi, previo a la licencia por viaje concedida por el Consejo de la Judicatura, dejara ordenando en

providencia de 20 de octubre de 2009 a las 08h30 que se sienta razón por secretaría, respecto del tiempo de detención de los procesados, atendiendo a las peticiones de caducidad que desde el 16 de septiembre de 2009 se han comenzado a presentar, a más de una huelga de hambre de familiares de dos de los procesados; les ha correspondido dictar la providencia mediante la cual se ha dejado sin efecto las prisiones preventivas que pesaba contra los procesados, por cuanto la razón, hacía mención a lo dispuesto en el numeral 9 del Art. 77 de la Constitución, ya que como autoridad judicial, está en la obligación de aplicar directamente las normas constitucionales; añadiendo, que la Constitución no castiga la aplicación de la prisión preventiva, sino que castiga a los funcionarios que con sus actuaciones, han hecho posible que ella se torne aplicable. Por último indica, que en el Informe que ya ha presentado, ha hecho mención a que el proceso ha llegado a Esmeraldas desde el Distrito de Guayaquil, a los diez meses y trece días desde su inicio, sin siquiera haberse realizado la audiencia preliminar; **b)** El Doctor Humberto Rodríguez Martínez, Juez de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas (fs. 49), expresa que en el proceso conocido como "Huracán de la Frontera", en su condición de juez y con fundamento legal en lo que prescribe el Código de Procedimiento Penal, publicado en el Registro Oficial 360—S, 13-I-2000 y que es el estatuto aplicable al caso, ha participado y ha suscrito providencias que dicen relación al trámite de la causa, la misma que ha llegado al Distrito de Esmeraldas el 28 de julio de 2009 a las 10h00, para dirimir la competencia entre el señor Juez Octavo de lo Penal del Guayas y el señor Juez Sexto de lo Penal de San Lorenzo; que la respectiva resolución se ha expedido el 4 de agosto de 2009, siendo que ese mismo día y con oficio No. 2001-CP-JE-S se ha despachado el expediente a la Judicatura del cantón San Lorenzo; que el 4 de septiembre de 2009 a las 16h00, se ha devuelto el proceso, ingresando a la Corte de Esmeraldas por la interposición de los recursos de Nulidad y Apelación que proponen varios de los imputados y, por la respectiva consulta sobre los sobreseimientos dictados; que juntamente con el Juez doctor Joel Arias Vélez, han presentado excusa para atender el caso, ya que como jueces emitieron pronunciamiento en el caso denominado "Huracán Verde", y por cuanto de dicho juicio el Fiscal, doctor Jorge Solórzano Ferrando ha incorporado elementos de dicha investigación involucrando a ciudadanos que también están mencionados en el caso "Huracán de la Frontera", por existir conexidad entre los trámites han presentado la excusa, pero que el abogado Víctor Guilcapi, no lo ha aceptado, por lo que inmediatamente han seguido despachando la causa; aclaran que su excusa la presentaron en cumplimiento del primer deber que tiene un juez, que es el de asegurar la competencia para evitar

que en lo futuro los imputados pudiesen impugnar su actuación; que el 14 de septiembre en su condición de juez de sustanciación, ha rechazado la petición de nulidad y apelación presentado por el imputado José Alberto Ferrín, y el 18 de septiembre de 2009 como integrante de la Sala, se ha pronunciado respecto de los pedidos de nulidad propuesto por varios sindicatos; que hasta esa fecha consta su intervención, ya que desde el 5 al 9 de octubre, se encontraba con licencia médica; del 12 al 21 de octubre, con vacaciones; y, desde el mismo 21 de octubre hasta la actualidad, con licencia por enfermedad; finalmente manifiesta, que esta causa ha tenido su inicio en la ciudad de Guayaquil con la intervención de la Jueza Cuarta de lo Penal del Guayas y durante diez meses y medio, ha permanecido en trámite de instrucción fiscal, hasta el 28 de julio de 2009, que ingresa a la Corte de Esmeraldas, quedando solo mes y medio para tramitar la etapa intermedia y la etapa del juicio como disponen los Arts. 228 y 262 inc. 2do. del Código de Procedimiento Penal; **c)** Abogado Víctor Guilcapi Camacho, Juez de la Corte Provincial de Esmeraldas (fs.163-165), manifiesta, que el proceso judicial en el que se ha declarado la caducidad, se ha iniciado en el Juzgado Cuarto de Garantías Penales del Guayas, con la audiencia de formulación de cargos del 16 de septiembre de 2008 siendo agente Fiscal, el abogado Jorge Solórzano Ferrando; la instrucción fiscal se inicia por el delito tipificado y reprimido en el Art. 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en cuyo acto judicial se ordena la prisión preventiva de los procesados; que la instrucción fiscal que se inicia por las afirmaciones del señor Fiscal, en la que manifiesta, "que cumpliendo con una orden de llamamiento (sic), dispuesto por el señor Juez Vigésimo Cuarto de lo Penal del Guayas, conforme consta en el documento que acompaña, se deprecó al señor Juez de lo Penal de San Lorenzo Provincia de Esmeraldas, para practicar la diligencia en la finca ubicada en el cantón San Lorenzo, Provincia de Esmeraldas, sector Campanitas, ribera del río Mataje, coordenada cero un grado 23 minutos dieciséis segundos norte y 86° 46 minutos 29 segundos Oeste que en la práctica de la diligencia se encontró aproximadamente 4.5 toneladas de una sustancia que posteriormente se identificó como cocaína con la prueba de campo enterrada dentro de esa propiedad, razón por la que fueron aprehendidos los ciudadanos Wilson Díaz Rodríguez, Jorge Eliecer Muñoz Calderón, Rodolfo Amburgo Coloma, Aleida Martínez Gutierrez, Quimberly Muñoz Martínez y Wilter José Olave Matamba, acusados del delito de tenencia de sustancias sujetas a control tipificadas en el Art. 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas; que este expediente se encuentra en trámite ante la Jueza Cuarta de Garantías Penales del Guayas, quien recién el 15 de abril de 2009, advierte que es

incompetente para conocer la especie y ha manifestado: "Por lo antes expresado y en conformidad a lo prescrito en el Art. 21 del Código de Procedimiento Penal, numeral 1, habiéndose producido el ilícito que es motivo de la investigación que se efectuó en la presente causa en la circunscripción territorial de Esmeraldas, donde además se dio la aprehensión de Rodolfo Amburgo Coloma, Wilson Díaz Rodríguez, Jorge Eliecer Muñoz Calderón, Wilter José Olave Matamba Aleida Martínez Gutierrez y Quimberly Muñoz Martínez, por ser legal y así corresponder, ME INHIBO del conocimiento de la presente instrucción fiscal, disponiendo que dejando constancia de todo lo actuado, se remita al señor Juez Sexto de lo Penal de San Lorenzo Esmeraldas, a fin de que sea dicha autoridad quien continúe con el conocimiento de la instrucción fiscal; que la misma jueza, el 28 de abril de 2009, absuelve las peticiones de aclaración, reforma y ampliación y concede el recurso de apelación; la Primera Sala de lo Penal del Guayas a quien correspondió el conocimiento de la causa, en auto de 4 de junio de 2009, ha manifestado: "Esto demuestra que la juez actuante, incurrió en un vicio de procedimiento, toda vez que el (sic) lugar de acatar lo que dispone la ley, continuó actuando ya sin competencia luego del auto indebidamente dictado, toda vez que en el presente caso, existe norma expresa en el Código de Procedimiento Civil que fue incumplido por la Jueza.- Por lo expuesto y, apreciando la Sala que este vicio de procedimiento debe ser reparado para que no afecte la validez del proceso, se declara la nulidad de lo actuado a partir del auto inhibitorio dictado el 15 de abril de 2009 a las 16h56, a costa de la Juez a quo. Por las razones expuestas no procede entrar a considerar los recursos de apelación de los autos de prisión preventiva y escritos presentados. Se amonesta severamente a la juez a quo, por su manifiesta negligencia en la tramitación de la cuada. (sic)"; que ante la excusa de la Jueza Zoila Alvarado, conoce la causa el Juez Suplente Octavo de lo Penal del Guayas, quien con decreto de 21 de julio de 2009, dispone remitir todo lo actuado a la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, lugar en donde se ha promovido la competencia a fin de que una de las Salas de lo Penal, dirima la misma; y, con decreto de 27 de julio de 2009, ha aclarado que el delito investigado en la presente instrucción, es por tenencia ilegal de drogas; que recibido el proceso, con providencia de 28 de julio de 2009, el compareciente ha puesto en conocimiento la recepción del proceso, ejecutoriado el auto, con fecha 4 de agosto de 2009, ha dirimido la competencia a favor del Juez de garantías Penales de San Lorenzo y Eloy Alfaro de la Provincia de Esmeraldas; que el indicado Juez ha sustanciando la etapa intermedia, dictando el auto interlocutorio remitiendo el proceso a la instancia superior, recibido el 4 de septiembre de 2009; el mismo día

ha puesto en conocimiento de las partes, disponiendo que los recurrentes fundamenten el recurso de nulidad en el plazo de tres días; que estando el proceso en estado de correr traslado, el 8 de septiembre de 2009, los doctores Humberto Rodríguez y Joel Arias, se han excusado de conocer el proceso manifestando que han conocido el trámite conocido con el nombre de "Huracán Verde"; por lo que el compareciente, ha negado dichas excusas con fecha 9 de los mismos mes y año; corriendo traslado a la contraparte para que contesten la fundamentación de los recursos de nulidad con decreto de 11 de septiembre de 2009, que el Fiscal no ha cumplido con dicho requerimiento; que algunos procesados, han provocado permanentes incidentes relacionados con el trámite de la excusa, hecho que ha sido resuelto por el compareciente; y el 2 de octubre de 2009 se ha remitido el proceso al Fiscal, quien lo ha devuelto el 19 de octubre del indicado año, por lo que en providencia de 20 de octubre de 2009, ha puesto nuevamente en conocimiento de las partes y ante el insistente pedido de los procesados, ha dispuesto que el secretario sienta la razón sobre el tiempo transcurrido desde que guardaban prisión hasta la providencia en referencia, siendo ésta, su última actuación por haber viajado a Houston por un intercambio judicial; que sentada la razón, los jueces doctores Joel Arias Vélez, Eugenio Jijón Guerrero y Jacinto Rivera Jiménez, el 22 de octubre de 2009, han declarado la caducidad de la prisión preventiva. Por último indica, que el proceso principal ha llegado a conocimiento de la Sala Penal de la Corte de Esmeraldas, el 4 de septiembre de 2009, solo a once días de que se produzca la caducidad; **d)** Dr. Joel Efraín Arias Vélez, Juez de la Corte Provincial de Esmeraldas (fs. 269-270), manifiesta: Que los jueces de la Corte Provincial, han tramitado el proceso denominado "Huracán de la Frontera", observando los principios consagrados en la Constitución de la República (Art. 77) y destacados en los Arts. 4, 5 y 6 del Código Orgánico de la Función Judicial; agrega que el proceso se ha iniciado el 16 de septiembre de 2008 mediante Instrucción Fiscal emitida por el Ab. Jorge Solórzano en audiencia de formulación de cargos cumplida en el Juzgado Cuarto de lo Penal del Guayas; que por competencia entablada por el Juez Sexto de Garantías de Esmeraldas con residencia en San Lorenzo, ha llegado el proceso a la Corte, el 28 de julio de 2009, para que se dirima la competencia, la que se ha resuelto mediante providencia de 4 de agosto de 2009; que el Juez Sexto de Garantías Penales, ha tramitado el proceso en la etapa intermedia y luego de la audiencia preliminar ha dictado auto de llamamiento a juicio para unos procesados y sobreseimiento para otros ordenando la consulta; que se ha interpuesto recurso de apelación y nulidad por lo que el proceso ingresa a la Sala Penal de Esmeraldas, el 4 de

septiembre de 2009 y en esa misma fecha se ha puesto en conocimiento de las partes la fundamentación del recurso de nulidad; que el 8 de septiembre de 2009, por considerar que estaban incurso en la causal sexta del Art. 856 del Código de Procedimiento Civil con el doctor Humberto Rodríguez, han presentado su excusa, la misma que ha sido denegada por el Juez doctor Víctor Guilcapi, el 9 de septiembre de 2009; que los procesados han formado incidentes, cuestionando la actuación de los jueces Dr. Humberto Rodríguez y Joel Arias, impugnación que ha sido resuelta por el doctor Víctor Guilcapi; que el 11 de septiembre del 2009, han corrido traslado a las partes para que contesten la fundamentación del recurso de nulidad; el 14 de septiembre el juez de sustanciación ha rechazado la petición de aclaración y ampliación el recurso de nulidad; el 18 de septiembre la Sala se ha pronunciado rechazando el recurso de nulidad, remitiendo el proceso a la Fiscalía Provincial, instancia que ha devuelto el proceso el 19 de octubre de 2009; y que el 22 de octubre se ha dictado la providencia de caducidad de la prisión preventiva en cumplimiento de lo previsto en el numeral 9 del Art. 77 de la Constitución; por último añade, que los integrantes de la Corte de Justicia de Esmeraldas, han actuado conforme a lo que manda la Constitución; e) El Abogado Jacinto Rivera Jiménez, Conjuez de la Corte Provincial de Esmeraldas (fs. 272), expresa que le han encargado el despacho del doctor Víctor Guilcapi por cuanto se le ha concedido licencia; que su actuación ha sido en razón del requerimiento de las partes y en atención a la razón sentada por el secretario, por lo que atendiendo las peticiones de caducidad les ha correspondido dictar dicho auto mediante el cual se deja sin efecto la prisión preventiva que pesaba en contra de los procesados por cuanto es su obligación aplicar las normas constitucionales; f) Dr. David Valencia Rosales, Secretario Relator de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas (fs. 339-341), manifiesta que su participación en el proceso denominado "Huracán de la Frontera" ha sido la siguiente: 1) El 28 de julio de 2009, el proceso llega a la Sala para que se dirima la competencia; 2) El mismo día a las 11h45, se ha puesto en conocimiento de las partes la recepción del proceso con autos en relación; 3) El miércoles 29 de julio de 2009, por sorteo pasa el proceso al despacho del doctor Humberto Rodríguez; 4) El 4 de agosto de 2009, la Sala resuelve dirimir la competencia a favor del Juez Sexto de garantías Penales de San Lorenzo; 5) El 6 de agosto, se ha trasladado a san Lorenzo a entregar el proceso; 6) El 4 de septiembre el proceso ha regresado a la Sala por consulta ordenada por el Juez de Garantías Penales de San Lorenzo por haberse interpuesto los recursos de Nulidad y Apelación; que a las 16h40 del mismo día, se ha puesto en conocimiento de las partes la recepción del

proceso con la finalidad de que los recurrentes fundamenten el recurso de nulidad; 7) El 11 de septiembre de 2009, se ha corrido traslado con las fundamentaciones; 8) El 14 de septiembre de 2009, se ha pronunciado la Sala respecto de la fundamentación de los recursos interpuestos; 9) El 18 de septiembre, la Sala se ha pronunciado rechazando los recursos disponiendo que el proceso pase al Fiscal Provincial, pero que hasta el fin de mes se han producido incidentes que retardan la tramitación judicial; 10) El 2 de octubre ha remitido el proceso al Fiscal Provincial, lo que ha sido aprovechado por los abogados de las partes, para causar daño institucional, por la serie de comentarios que se han vertido; 11) El 19 de octubre de 2009, ha recibido el proceso de manos del Fiscal Provincial; 12) El 20 de octubre se ha puesto los autos en relación; 13) El 21 de octubre de 2009 consta la razón ordenada por el doctor Víctor Guilcapi, para determinar las fechas en que fueron privados de su libertad los procesados; 14) El 22 de octubre de 2009, la Sala se ha pronunciado sobre la caducidad de la prisión preventiva, ordenando la libertad de los procesados; por último agrega, que su responsabilidad en calidad de Secretario Relator se ha limitado a cumplir inmediatamente, con agilidad y celeridad las notificaciones de las providencias y los autos. **g)** El doctor Edgar Salazar Vera, Juez Décimo de garantías Penales del Guayas (fs. 368), manifiesta que ha intervenido por recusación (primera recusación), tramitada en contra de la doctora Zoila Alvarado Moncada, Jueza Cuarta de Garantías Penales del Guayas dictando diez providencias, hasta el 27 de enero de 2009, que lo ha hecho por última vez, cuando el proceso ha regresado donde la Jueza titular luego del fallo favorable a ella sobre el juicio de recusación; que durante el tiempo que ha actuado como Subrogante, no se han concedido revocatorias, apelaciones, cauciones o situaciones de las medidas cautelares personales, con lo que demuestra que no tiene responsabilidad en la investigación ya que su actuación se ha limitado a una cuestión de trámite contemplada en las normas procesales; **h)** Abogada Dora Vargas Troncoso, Secretaria del Juzgado Cuarto de Garantías Penales del Guayas; en la actualidad, Jueza (e) de la indicada Judicatura (fs. 445-449), expresa que de manera enérgica pero muy respetuosa, rechaza el expediente iniciado en su contra por cuanto dice, ser una funcionaria judicial con más de catorce años de labores tiempo en el que ha desempeñado varios cargos, hasta el actual que es el de Jueza Cuarta de Garantías Penales encargada; que durante su trayectoria, nunca ha tenido quejas por problemas; que en cuanto al expediente denominado "Huracán de la Frontera", sus actuaciones en calidad de secretaria, no tenían injerencia ni poder de decisión en las resoluciones y autos, providencias y decretos emitidos por la Jueza que eran notificados

el mismo día; que de igual manera ha puesto a despacho de los jueces que por recusación han conocido la causa; que de igual forma se ha remitido el proceso al superior; a continuación agrega que el proceso se ha iniciado 17 de septiembre de 2008 en audiencia de delitos flagrantes y que por petición fiscal, ha existido cinco vinculaciones por lo que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 221 del Código de Procedimiento Penal, la instrucción se mantendrá abierta por 30 días adicionales por cada vinculación contados a partir de cada notificación, por lo que el dictamen fiscal se ha recibido el mes de marzo de 2009 es decir 6 meses después de iniciada la instrucción fiscal; que en el mismo proceso, las partes a través de sus abogados han propuesto tres recusaciones en contra de la juez, así como recursos de apelación de la medida cautelar de carácter personal, por lo que se ha enviado copias certificadas al superior por las devoluciones de los bienes de los procesados por disposición del Fiscal de la causa, haciendo el detalle siguiente: A partir del 15 de septiembre de 2008, providencia señalando fecha de audiencia de formulación de cargos, Indagación; 16 de septiembre, Acta de audiencia de formulación de cargos; 16 de septiembre, se señala fecha para la audiencia de formulación de cargos; 18 de septiembre, Audiencia de flagrancia PJG; 22 de septiembre, se realiza audiencia de formulación de cargos y vinculación de otros procesados, se extiende 30 días adicionales a la instrucción; 24 de septiembre, providencia disponiendo se depreque; 26 de septiembre, se ordenan allanamientos; 26 de septiembre, providencia ordenando destrucción de evidencias; 1 de octubre, destrucción de alcaloide; 16 de octubre, providencia ordenando allanamientos; 13 de noviembre, providencia ordenando remitir copias certificadas al superior; 17 de noviembre, providencia con excusa por recusación; 19 de noviembre, razón, dirigida al juez décimo, poniendo al despacho el proceso; 20 de noviembre, providencia del juez décimo; 25 de noviembre, providencia ordenando allanamientos; 19 de diciembre de 2008, providencia señalando fecha para audiencia de formulación de cargos, para el 23 de diciembre de 2008; 31 de diciembre, providencia señalando fecha para audiencia de formulación de cargos, para el 7 de enero de 2009; 7 de enero, se realiza la audiencia y por vinculación, 30 días adicionales a la instrucción; 8 de enero, providencia ordenando devolución de bienes; 14 de enero, providencia devolución de bienes; 19 de enero, providencia disponiendo se oficie al Jefe de Policía; 27 de enero, providencia señalando fecha para audiencia de formulación de cargos; 30 de enero, se celebra audiencia de vinculación, se extiende 30 días a la instrucción; 2 de febrero de 2009, providencia ordenando allanamientos; 2 de febrero, providencia señalando fecha para audiencia de formulación de cargos; 3

de febrero, se celebra audiencia, ampliando la instrucción 30 días más por vinculación; 10 de febrero, providencia ordenando se remita instrucción a sorteo por nueva recusación a la jueza; 10 de febrero, razón poniendo a despacho Juez Segundo la Instrucción; 13 de febrero, se recibe copias de la Corte Superior; 19 de febrero, a despacho del Juez Segundo (regreso de licencia); 26 de febrero, providencia de Juez Segundo; 9 de marzo, 6 meses después de iniciada la instrucción se recibe el dictamen fiscal en 70 cuerpos; 13 de marzo (viernes), razón poniendo a despacho la causa; 16 de marzo (lunes), providencia notificando dictamen y ordenando se remita en consulta de abstención a Ministerio Fiscal; 1 de abril, se recibe el proceso de Ministerio Fiscal; 7 de abril, providencia notificando dictamen fiscal y solicitando que fiscal seguirá conociendo la instrucción; 8 de abril, revocatoria a los procesados ratificados por el Ministerio Fiscal como encubridores; 8 de abril, oficio recibido de la secretaría disponiendo que fiscal continúa en el trámite; 18 de abril, providencia inhibiéndose la Jueza Cuarta; 28 de abril, providencia aceptando el recurso de apelación por parte del fiscal; 6 de mayo de 2009, oficio remitiendo proceso al superior; hasta aquí dice ha sido su intervención como Secretaria del Juzgado Cuarto de Garantías Penales; **i)** Doctor Carlos Luis Ortega, Abogados Marcos Quimi Villegas y Faustino Castro Tobar, Juez y Conjuces permanentes respectivamente de la Primera Sala de lo Penal, Colusorio y de Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas (fs. 588), manifiestan: Que rechazan e impugnan el expediente iniciado en su contra, ya que indican no tener ninguna responsabilidad por cuanto la Sala a la que pertenecen, ha despachado en forma oportuna y apegada a derecho y en el plazo determinado en la Ley, por lo que no han incurrido en mora como así consta en el informe que han emitido, por lo que solicitan que al momento de resolver, se los exima de responsabilidad; **j)** La doctora Zoila Alvarado Moncada, en la actualidad Presidenta del Décimo Tribunal de Garantías Penales del Guayas (fs. 642-647), manifiesta que el 18 de septiembre de 2008, en su calidad de Jueza Cuarta de Garantías Penales del Guayas, le ha correspondido avocar conocimiento de la instrucción fiscal 47-2008, en contra de los imputados José Enrique Rivera y otros, dictando prisión preventiva en contra de los mismos por el presunto delito de tenencia y posesión de sustancias ilícitas, tipificado y reprimido en el Art. 62 de la Codificación de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas; que el 17 de noviembre de 2008 se ha excusado de seguir tramitando la causa, por haber sido recusada por la imputada Doris Riasco, por lo que ha dispuesto que la secretaría (e) del despacho, remita todo lo actuado a la oficina de Sorteos para que previo al sorteo, sea uno de los jueces del distrito, quien continúe con el trámite

de la causa; el 19 de noviembre de 2009 la secretaria ha sentado una razón manifestando que le corresponde al señor Juez Décimo de Garantías Penales del Guayas continuar con la tramitación del proceso; el 10 de diciembre de 2008, el Fiscal abogado Jorge Solórzano, ha realizado la primera vinculación y ha hecho extensiva la instrucción fiscal a la imputada Rosa Noboa, correspondiéndole al Juez Décimo de Garantías Penales del Guayas, realizar la audiencia de formulación de cargos el 7 de enero de 2009, otorgando 30 días adicionales al plazo de instrucción fiscal; que el 23 de enero de 2009, el señor Juez Décimo de Garantías Penales del Guayas, ha dictado una providencia proveyendo al escrito presentado por el señor Juez Sexto de de lo Penal de San Lorenzo y Eloy Alfaro que textualmente dice: "Proveyendo al mismo y considerando lo solicitado, se deja constancia mediante providencia de fecha 17 de diciembre de 2008 a las 17:02:51, el suscrito se pronuncia sobre la presunta incompetencia, en razón del territorio, alegada por Luis Alberto Ferrín Reina, de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 21 y 27 el Código de Procedimiento Penal, con arreglo al debido proceso y además se deja establecido que el señor representante del Ministerio Público Ab. Jorge Solórzano Ferrando, inició y se encuentra impulsando esta causa por infracciones continuas cometidas en las diferentes provincias, como son Esmeraldas, Pichincha, Chimborazo, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, donde se han realizado detenciones, allanamientos y comisos; además de ser el competente por el sorteo reglamentario, quedando de esta forma demostrado que no hay lugar a la inhibición solicitada, por lo que se niega la solicitud por improcedente"; que el 26 de enero de 2009, el Fiscal Solórzano, realiza la segunda vinculación haciendo extensiva la instrucción fiscal en contra de tres imputados; el 27 de enero del 2009, realiza la tercera vinculación haciendo extensiva la instrucción fiscal a José Chauvín; el 29 de enero de 2009, por haberse resuelto la recusación se le devuelve la competencia a la compareciente, se ha realizado la audiencia de formulación de cargos de los imputados antes indicados y ha ordenado la prisión en contra de todos, por lo que desde la fecha de la última vinculación, 7 de enero de 2009, hasta la fecha en que el fiscal realiza las dos últimas vinculaciones, no habían transcurrido los treinta días más que dice el Art. 221 del Código de Procedimiento Penal; que el 2 de febrero de 2009, el fiscal Ab. Solórzano, realiza la cuarta vinculación en contra de tres imputados por lo que se ha hecho extensivo el plazo de duración de treinta días más a la instrucción y la audiencia de formulación de cargos, se ha realizado el 3 de febrero del 2009; la prisión preventiva ha sido apelada por varios de los imputados, las mismas que han sido aceptadas, remitiéndose copia certificada del proceso a la Corte, correspondiéndole a la Primera Sala de

lo Penal de la Corte Provincial del Guayas; el 9 de febrero de 2009, se ha excusado de seguir tramitando el presente proceso por haber sido recusada por segunda ocasión, disponiendo que la secretaria encargada, remita a sorteos para que sea uno de los jueces de lo penal del distrito quien continúe con el trámite de la causa; habiéndole tocado al señor Juez Segundo de Garantías Penales del Guayas; el 9 de marzo de 2009, el Fiscal Solórzano, ha emitido dictamen fiscal en 70 cuerpos en contra de de 16 procesados y abstentivo a favor de tres; el 13 de marzo de 2009, se le devuelve la competencia y por ser un delito de reclusión, ha realizado la consulta obligatoria a fin de que el Fiscal Superior ratifique o rectifique el dictamen no acusatorio a favor de tres imputados, por lo que se ha enviado el original del proceso, el mismo que ha sido devuelto el 1 de abril de 2009, ratificando el dictamen no acusatorio a favor de dos, y como encubridor al tercero, por lo que al devolverlo, se debía asignar otro fiscal para los procesados que habían ratificado el dictamen no acusatorio; el 7 de abril de 2009, ha dispuesto convocar a audiencia preliminar y oficiar a la secretaría de Fiscales, para que se informe que fiscal va a intervenir en la audiencia preliminar, habiendo sido asignada la fiscal abogada Rita García; el 16 de abril de 2009, ha emitido el auto inhibitorio en razón de los oficios suscritos por el abogado Segundo Caicedo Nazareno, Juez Sexto de lo Penal de San Lorenzo; a fin de que ceda o contradiga la competencia por cuanto el imputado Rodolfo Amburgo Coloma, ha presentado una demanda de competencia por haber sido detenido en el sector de Campanita, riveras del río Mataje, cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas; por lo que se inhibe del conocimiento de la instrucción fiscal y dejándose constancia de todo lo actuado, ha dispuesto que se remita al señor Juez Sexto de lo Penal de San Lorenzo, para que se continúe con la instrucción fiscal; el 17 de abril de 2009, el fiscal Solórzano, ha presentado recurso de apelación del auto inhibitorio, correspondiéndole el conocimiento a la Primera Sala de la Corte Provincial del Guayas; el 13 de julio de 2009, que ha llegado el proceso al Juzgado desde la Primera Sala de Jueces Penales, Colusorio y de Tránsito de la Corte Provincial del Guayas, que con auto de 4 de junio ratifican el auto inhibitorio, por haber despachado escritos después de la fecha del referido auto, también ha declarado la nulidad, razón por la que se ha excusado de seguir con la tramitación de la instrucción; el 18 de septiembre de 2009, la Corte Provincial de Esmeraldas, ha rechazado los recursos de nulidad interpuestos por los imputados; que respecto a las posibles responsabilidades de carácter disciplinario atribuibles, indica que el proceso penal se ha iniciado el 18 de septiembre de 2008, y el Fiscal por ser el dueño absoluto del ejercicio de la acción penal, ha realizado cuatro

vinculaciones que por treinta días que dura cada vinculación, daría un total de 120 días; que ha sido un proceso con 19 procesados que algunos de ellos han presentado ampliación y aclaración de las providencias y apelación de autos de prisión preventiva; que el fiscal ha emitido dictamen fiscal mixto, acusatorio y abstentivo, lo que ha obligado realizar la consulta al Fiscal Superior, quien se ha demorado un mes en emitir la ratificación o abstención; que el procesado Diego Benítez, ha presentado una acción de Amparo de Libertad, razón por la que se ha debido remitir el proceso en originales a la Presidencia de la Corte, el mismo que fuera negado; que el 17 de enero de 2009, se ha enviado el proceso en originales a la primera Sala de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas, por cuanto José Chauvín, ha presentado una acción de Hábeas Corpus; que después de que se resolviera la primera acción de Habeas Corpus, varios procesados también han presentado las mismas acciones, lo que ha conllevado remitir el original del proceso a la Sala que corresponda sustanciar y resolver; que tratando de dilatar se han presentado dos demandas de recusación, por mora, las mismas que han sido declaradas sin lugar; que desde el 30 de abril de 2009 hasta noviembre del mismo año, le han encargado el Juzgado Fiscal de Aduanas del Guayas; que entre el 25 de mayo al 19 de junio de 2009, ha hecho uso de sus vacaciones; y por esta razón ha debido despachar dos Juzgados, en los que tenía que estar presente en las audiencias de formulación de cargos e inicio de instrucción fiscal, vinculaciones, solicitudes de medidas cautelares, revocatorias de estas medidas y todos los actos procesales, por lo que mal se le podría imputar la caducidad de la prisión preventiva; **k)** Abogado Galo René Almeida Tapia, Ex Juez Suplente del Juzgado Octavo de Garantías Penales del Guayas (fs. 701-703), manifiesta, que por auto resolutorio de 4 de junio de 2009, emitido por la Primera Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, declaran la nulidad de lo actuado a partir del auto inhibitorio dictado por la abogada Zoila Alvarado, por lo que por sorteo, el 17 de julio de 2009, se ha radicado la competencia del proceso en el Juzgado Octavo de Garantías Penales del Guayas, fecha en la que ha puesto en conocimiento de las partes la recepción del proceso por tratarse de un asunto que ha causado gran alarma social; que posteriormente con fecha 21 de julio de 2009, cumpliendo con un mandato superior contradiciendo la competencia, ha dispuesto que el proceso se remita a la Corte Provincial de Esmeraldas lugar en donde se ha promovido la competencia, remitiéndose el expediente el 27 de julio de 2009; y que el 4 de agosto de 2009, los Ministros de la Corte Provincial de Esmeraldas, han dirimido la competencia a favor del Juez Sexto de lo Penal de San Lorenzo; agrega que

por lo anteriormente expuesto, ha cumplido con el plazo de diez días, con los actos y diligencias necesarias para la sustanciación del expediente denominado "Huracán de la Frontera". **I)** El doctor Luis Santana Benavidez, Juez Segundo de Garantías Penales del Guayas (fs. 706-707), manifiesta que le es imposible contestar con exactitud lo solicitado con relación a la Instrucción Fiscal, más conocido como "Huracán de la Frontera", por cuanto el mismo se encuentra en la Corte Provincial de Esmeraldas; y agrega, "No fui juez principal del proceso, y únicamente por una de las tantas recusaciones conozco interpusieron los procesados, el expediente principal fue puesto a mi conocimiento transitoriamente y por aproximadamente una semana..., separándome casi inmediatamente de su conocimiento ya que el 02 de marzo del 2009, a las 09h00, esto es exactamente a los siete días, el señor Juez Décimo Quinto de lo Penal del Guayas, doctor Oswaldo Sierra Ayora, dictó sentencia, declarando sin lugar la demanda de recusación", disponiendo que continúe con el conocimiento de la causa, la abogada Zoila Alvarado, por lo que manifiesta que no se le puede atribuir ninguna falta de carácter administrativo.- Encontrándose el expediente en estado de resolución, para hacerlo, se considera: **PRIMERO**.- El Pleno del Consejo de la Judicatura es competente para conocer el presente expediente, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 181 de la Constitución de la República; Arts. 264 numeral 18 del Código Orgánico de la Función Judicial, Art. 169 del Código de procedimiento Penal y 24 inciso primero de las "Normas para el Ejercicio de Control Disciplinario de la Función Judicial, para el Período de Transición". **SEGUNDO**.- En su tramitación se han observado las solemnidades legales y reglamentarias por lo que al no existir motivos de nulidad se declara válido por cuanto se han observado las reglas del debido proceso, se han agregado las constancias procesales indicadas por los sumariados, al igual que la copia del juicio penal No. 859-B-08 que se dispuso de oficio, lo confiera la Corte Provincial de Esmeraldas; las acciones de personal correspondientes, registros de antecedentes disciplinarios de los indicados servidores y además la documentación remitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura referente a los Informes elaborados por los Directores Provinciales de Guayas y Esmeraldas. **TERCERO**: La Sala única de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, integrada por los señores doctores: Joel Arias Vélez, Jacinto Rivera Jiménez, Conjuez y Eugenio Jijón Guerrero, Conjuez, mediante resolución de 22 de octubre de 2009 a las 08h30, resolvió que en cumplimiento a lo determinado en el numeral 9 del Art. 77 de la Constitución de la República, en concordancia con lo dispuesto en el Art. 169 del Código de Procedimiento Penal, deja sin efecto la orden de detención preventiva

dictada dentro del juicio No. 859-B-08, contra los imputados Fabián Armando Zamora Martínez, Edison Ostaiza Amay, Miguel Angel Ostaiza Amay, Luis Alberto Ferrín Reyna, Wilter José Olave Matamba, Wilson Díaz Rodríguez, Rodolfo Amburgo Colona, Aleida Martínez Gutiérrez, Jorge Eliecer Muñoz Calderón, Doris Alicia Riasco Enríquez y José Roberto Enríquez Rivera, por haber transcurrido UN AÑO sin sentencia, pues dicha caducidad, se ha producido en circunstancias que el proceso penal de la referencia, ha subido a la Sala Única de la Corte de Esmeraldas para resolver la apelación y nulidad del auto de llamamiento a juicio en contra de los referidos imputados dictado el día 3 de septiembre de 2009, por el Juez de Garantías Penales del Cantón San Lorenzo de la Provincia de Esmeraldas. Siendo competencia del Pleno de este Consejo de la Judicatura, establecer las responsabilidades administrativas o disciplinarias en contra de los servidores judiciales que por su acción u omisión han contribuido a que se produzca la caducidad de la cual se han beneficiado los antes referidos imputados. **CUARTO.-** De la revisión del expediente penal No. 859-B-08 por tráfico de drogas, se puede verificar lo siguiente: **a)** A fs. 728, consta la copia de la providencia de fecha 17 de julio de 2008, a las 16h00, mediante la cual, da por iniciada la Indagación Previa el abogado Jorge Solórzano Ferrando, Fiscal Cuarto Antinarcóticos del Guayas, fundamentado en el oficio No. 1482-JPAG-08, suscrito por el Teniente Coronel de Policía Enrique Fernando Suárez Salazar, Jefe de Policía Antinarcóticos del Guayas poniendo en conocimiento el Parte Informativo suscrito por el Teniente de Policía Wilson Coloma Altamirano, con el mismo que da a conocer, que por una información de carácter reservado ha llegado a tener conocimiento que el ciudadano de nombres Angel Riascos Enríquez, forma parte de una red internacional de exportación de drogas por vía marítima desde puertos ecuatorianos; que esta organización tendría vínculos en las Provincias de Sucumbíos, Orellana, Pichincha, Chimborazo, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas y Guayas; **b)** A fs. 733, consta la copia del Parte Informativo antes indicado, mediante el cual el Teniente de Policía Wilson Coloma Altamirano, indica que continuando con las investigaciones, en virtud de lo establecido en los Arts. 93, 194 y 195 del Código de Procedimiento Penal, solicita se obtenga la orden de allanamiento de la finca ubicada en la Provincia de Esmeraldas, cantón San Lorenzo, sector Campanita, riberas del río Mataje, localizada en las coordenadas N 01° 23' 16.8" y W 78° 46' 39.39"; **c)** A fs. 745, consta la copia de la providencia de 14 de septiembre de 2008, emitida por el abogado Johann Marfetan Medina, Juez Vigésimo Cuarto de lo Penal del Guayas, ordenando que se ejecute el allanamiento de la finca ubicada en la Provincia de Esmeraldas, cantón San Lorenzo,

sector Campanita, riberas del río Mataje, localizada en las coordenadas N 01° 23' 16.8" y W 78° 46' 39.39", mediante deprecatorio a uno de los señores Jueces de lo Penal de Esmeraldas; **d)** A fs. 771-775, consta la copia del acta de allanamiento de fecha 15 de septiembre de 2008, llevada a efecto en el sector Campanita, del cantón San Lorenzo, Provincia de Esmeraldas en la misma que se procede a la aprehensión de seis personas, varios bienes y, trescientos diez bultos de saco de yute conteniendo en su interior, varios paquetes envueltos en cinta de embalaje que contenían una sustancia color blanquecina que después de realizada la prueba preliminar de campo, ha dado resultado positivo para clorhidrato de cocaína; en el acta de verificación, pesaje y toma de muestras, se ha establecido que el peso neto de esta sustancia, es de once mil setenta y cinco gramos (fs. 794); **QUINTO:** La etapa del proceso judicial, se desarrolla dentro del siguiente marco cronológico. **5.1.-** Respecto de la **abogada Zoila Alvarado Moncada**, Jueza Cuarta de lo Penal del Guayas: **a)** A fs. 7966, consta la copia del auto de 15 de septiembre de 2008, las 10h45:37, mediante el cual avoca conocimiento de la causa; **b)** A fs. 757, consta la copia del acta de audiencia de formulación de cargos, llevada a efecto el 16 de septiembre de 2008, ante la Jueza Cuarta de lo Penal del Guayas; **c)** De fs. 759 a 763, consta la copia de la diligencia de formulación de cargos llevada a efecto ante la Jueza Cuarta de lo Penal del Guayas con fecha 18 de septiembre de 2008, en la misma que el Fiscal solicita la vinculación de once imputados); **d)** A fs. 8519, consta la copia de la demanda de recusación planteada por Doris Riascos, con el auspicio del abogado Eduardo Reyes Lamota, Mat. 5776 Colegio de Abogados del Guayas; **e)** A fs. 8521, consta la copia de la providencia emitida con fecha 14 de noviembre de 2008, las 16h35 por la Jueza Zoila Alvarado Moncada, en la que se excusa del conocimiento de la causa en virtud de la demanda de recusación de la imputada Doris Riascos; **5.2.-** Respecto del **Dr. Edgar Salazar Vera**, Juez Décimo de lo Penal del Guayas: **a)** A fs. 8543, avoca conocimiento de la causa, con providencia de 24 de noviembre de 2008; **b)** A fs. 8561, consta una copia de un escrito presentado por Luis Alberto Ferrín Reina, patrocinado por el abogado Carlos Gómez Tandayamo, con el que alega falta de competencia del juez; **c)** De fs. 8564 a 8567, consta copia de un escrito con el que solicita la nulidad del proceso propuesta por Edison Ostaiza Amay, patrocinado por Carlos Rubio; **d)** A fs. 8644, mediante providencia de 17 de diciembre de 2008, ratifica su competencia en el conocimiento de la causa y señala día para que se lleve a efecto la audiencia de formulación de cargos; **e)** A fs. 8753, consta copia de una demanda de competencia contra el Juez Décimo de lo Penal del Guayas, doctor Edgar Salazar Vera, presentada por Luis Ferrín Reina, con el

patrocinio del abogado Carlos Gómez Tandayamo; **f)** A fs. 8778, consta la providencia de 27 de enero de 2009, a las 09h06, suscrita por el doctor Edgar Salazar Vera, en la que manifiesta que se solicite informe a la Secretaría del Juzgado Octavo de lo Penal del Guayas, respecto del estado en que se encuentra el proceso por recusación No. 1124-2008, a continuación de la notificación, a fojas 8780, consta una providencia de 27 de enero de 2009, a las 10h40, en la que la jueza Zoila Alvarado, mediante providencia, indica que en razón de que el Fiscal ha realizado la vinculación de cinco personas, señala fecha para que se lleve a efecto la audiencia de formulación de cargos; **g)** A fs. 8922, consta el auto de calificación de la demanda de recusación presentada por Rodolfo Amburgo Coloma, por parte del doctor Oswaldo Sierra Ayora Juez Décimo Quinto de lo Penal del Guayas. A fs. 8954, consta la copia de la providencia de 9 de febrero de 2009, emitida por la jueza Alvarado en la que manifiesta que por haber sido citada con una demanda de recusación, se remita la causa a la Sala de Sorteo a fin de que se continúe con el trámite del proceso; **5.3.-** Respecto del **Dr. Luis Santana Benavidez**, Juez Segundo de lo Penal del Guayas; **a)** A fs. 8956, luego del sorteo, la secretaria de la Judicatura, pone a su despacho la causa, con fecha 10 de febrero de 2009; **b)** A fs. 9752, consta la providencia de 26 de febrero de 2009, mediante la cual, avoca conocimiento de la causa, disponiendo inmediatamente que el Juzgado Décimo Quinto de lo Penal del Guayas, le informe el estado en que se encontraba el juicio de recusación No. 241-2009 relacionado con dicho expediente; hasta el 13 de marzo de 2009, fecha en el que consta la razón sentada por la secretaria del Juzgado Cuarto de lo Penal del Guayas, con la que pone a despacho de la abogada Zoila Alvarado, mediante la razón que textualmente, dice: "Siento como tal que, habiendo recibido la presente Instrucción por parte de la Presidencia de esta Corte Provincial, el día de ayer a las 16h26, lo pongo a su despacho a fin que provea lo que en derecho corresponda, por cuanto mediante sentencia se le ha devuelto a usted la competencia" (fs. 10071); A fs. 10072, mediante providencia de 13 de marzo de 2009, las 17h15, la Jueza Zoila Alvarado, atenta la razón actuarial, sigue tramitando el juicio; **5.4.- a)** A fs. 10586, consta la providencia de 15 de abril de 2009, con la que la abogada Zoila Alvarado jueza Cuarta de lo Penal, concede apelación, eleva en consulta el proceso y en virtud del oficio No. 166-ISPE-SL-WA-2009 suscrito por el abogado Segundo Caicedo Nazareno, Juez Sexto de lo Penal de San Lorenzo y Eloy Alfaro, con el mismo que le menciona a la indicada jueza que ceda o contradiga la competencia, por cuanto el imputado Amburgo Rodolfo Coloma ha presentado una demanda de competencia por haber sido detenido en el sector Campanitas, riberas del río Mataje, cantón San

Lorenzo, Provincia de Esmeraldas y mediante providencia, manifiesta: “De la revisión del proceso se llega a la clara determinación que los hechos que motivaron la aprehensión de Rodolfo Amburgo Coloma, se dio en un operativo realizado por el mencionado fiscal y elementos antinarcóticos el 15 de septiembre de 2008 en el sector Campanitas, riberas del río Mataje, cantón San Lorenzo, Provincia de Esmeraldas, siendo tal lugar no corresponde a la circunscripción en donde ejerce las funciones la suscrita jueza”, se inhibe del conocimiento de la causa y dispone que se lo remita al mencionado Juez Penal de San Lorenzo; **b)** A fs. 10587, consta la copia del escrito con el cual el fiscal abogado Jorge Solórzano Ferrando, con fecha 17 de abril de 2009, apela de la providencia anterior, la misma que es aceptada por la jueza Cuarta de lo Penal del Guayas abogada Zoila Alvarado; **c)** A fs. 10606, consta la providencia de 28 de abril de 2009, emitida por la Jueza Cuarta de lo Penal del Guayas, con la que dispone se eleven los autos al superior y absuelve peticiones; **5.5.-** Respecto de la **Primera Sala de lo Penal del Guayas**; **a)** A fs. 10617, consta la resolución emitida por la indicada Sala conformada por el doctor Carlos Luis Ortega Sánchez y abogados Faustino Castro Tobar y Marco Quimi Villegas, Jueces y Conjuez permanente, que en auto de 4 de junio de 2009, que dice: “... Esto demuestra que la juez actuante, incurrió en un vicio de procedimiento, toda vez que en lugar de acatar lo que dispone la ley, continuó actuando ya sin competencia luego del auto indebidamente dictado, toda vez que en el presente caso, existe norma expresa en el Código de Procedimiento Civil que fue incumplido por la Jueza.- Por lo expuesto y, apreciando la Sala que este vicio de procedimiento debe ser reparado para que no afecte la validez del proceso, declara la nulidad de lo actuado a partir del auto inhibitorio dictado el 15 de abril de 2009 a las 16h56, a costa de la Juez a quo; en esta instancia se encuentra el proceso, desde la fecha 4 de junio que emiten la resolución; **5.6.-** A fs. 10750, consta el decreto de 21 de julio de 2009, emitido por el abogado Galo Almeida Tapia, Juez Suplente Octavo de lo Penal del Guayas quien ante la excusa de la Jueza Zoila Alvarado, conoce la causa y dispone remitir todo lo actuado a la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, lugar en donde se ha promovido la competencia a fin de que una de las Salas de lo Penal, dirima la misma, es decir, contradice la competencia; y, con decreto de 27 de julio de 2009, (fs. 10754bis), aclara que el delito investigado en la presente instrucción, es por tenencia ilegal de drogas; **5.7.-** A fs. 77, consta el recibido del proceso en la Secretaría de la **Corte Provincial de Esmeraldas** mediante razón del Secretario Relator de fecha 28 de julio de 2009 a las 10h00; y, con providencia de 28 de julio de 2009, el abogado Víctor Guilcapi, Juez de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, pone

en conocimiento la recepción del proceso; ejecutoriado el auto, con fecha 4 de agosto de 2009, dirime la competencia a favor del Juez de Garantías Penales de San Lorenzo y Eloy Alfaro de la Provincia de Esmeraldas (fs. 78); **5.8.-** De fs. 13135 a 13176, consta el auto de llamamiento a juicio emitido por el Juez Sexto de Garantías Penales de Esmeraldas, de fecha 21 de agosto de 2009, del mismo que se solicita, aclaración, ampliación, apelación y nulidad por los imputados. A fs. 13438, consta la razón sentada por el doctor David Valencia Rosales, secretario Relator de la única Sala de la Corte Provincial de Esmeraldas, en la que consta el recibido de fecha 4 de septiembre de 2009, a las 15h00, de la causa iniciada y tramitada en el Juzgado Sexto de Esmeraldas, con asiento en la ciudad de San Lorenzo, que sube a conocimiento de la Corte Provincial, en razón de la consulta ordenada por el inferior por los recursos de nulidad y apelación interpuestos por los imputados del auto de llamamiento a juicio dictado en su contra; **5.9.-** A fs. 13712 y con fecha 8 de septiembre de 2009, los **doctores Humberto Rodríguez y Joel Arias, Jueces Provinciales de la Corte de Justicia de Esmeraldas**, se excusan de conocer el proceso manifestando que anteriormente han conocido el trámite conocido con el nombre de "Huracán Verde"; el 9 de los mismos mes y año, el Juez abogado Víctor Guilcapi, rechaza dichas excusas (fs. 13716) y corre traslado a la contraparte para que contesten la fundamentación de los recursos de nulidad; **5.10.-** Ante el pedido de caducidad de los procesados, se dispone que el secretario sienta la razón sobre el tiempo transcurrido desde que los procesados guardan prisión. Sentada la razón, que dice: *"En cumplimiento a lo ordenado en providencia de fecha 20 de octubre del 2009 a las 08h30 que antecede, siento como tal que, dentro del proceso penal No. 27.972, que por tenencia ilegal de drogas se sigue en contra de los señores FABIAN ARMANDO ZAMORA, EDISON ARIOLFO OSTAIZA AMAY, MIGUEL ANGEL OSTAIZA AMAY, LUIS ALBERTO FERRIN REYNA, WILTER JOSE OLAVE MATAMBA, WILSON DIAZ RODRIGUEZ, RODOLFO AMBURGO COLOMA, ALEIDA MARTINEZ GUTIERREZ, JORGE ELIECER MUÑOZ CALDERON, DORIS ALICIA RIASCOS ENRIQUEZ Y JOSE ROBERTO ENRIQUEZ RIVERA, SE ENCUENTRAN PRIVADOS DE SU LIBERTAD DESDE EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2008, HASTA LA PRESENTE FECHA"*, los jueces **doctores Joel Arias Vélez, Eugenio Jijón Guerrero y Jacinto Rivera Jiménez, declaran la caducidad de la prisión preventiva** de los procesados con fecha 22 de octubre de 2009 (fs. 13859). **SEXTO:** La Sala única de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, integrada por doctores Humberto Rodríguez Martínez, Joel Arias Vélez y abogado Víctor Guilcapi, mediante resolución dictada el 4 de agosto de 2009 a las 09h00, al resolver el conflicto de competencia presentado dentro del indicado proceso que se

encontraba en etapa de instrucción, dejó definitivamente resuelto que el Juez competente para conocer el referido proceso era el Juez con sede en el cantón San Lorenzo, Provincia de Esmeraldas, por las consideraciones expuestas en dicha resolución, lo cual pudo y debió haber sido advertido oportuna y particularmente por la Jueza Cuarta de Garantías Penales del Guayas, abogada Zoila Alvarado al momento de avocar conocimiento mediante providencia de 15 de septiembre de 2008, pudiendo haber evitado los incidentes procesales que finalmente incidieron en la caducidad de la orden de detención preventiva de los imputados, lo que produjo un escándalo con gran alarma social y desprestigio a la administración de justicia, ya que se desperdició buena cantidad de tiempo que hubiera sido utilizado para investigar la infracción y resolver la situación de los imputados, produciéndose una caducidad que está a cargo de quienes provocaron y alargaron un incidente, que se hubiera resuelto jurídica y procesalmente, con objetividad, celeridad, simplicidad, responsabilidad y fundamentalmente, previniendo la eventual caducidad de la detención preventiva. **SÉPTIMO:** La etapa de instrucción fiscal que pone en movimiento el proceso judicial de la referencia, la inicia la Abogada Zoila Alvarado, Jueza Cuarta de Garantías Penales del Guayas, quien recibe de la Fiscalía los antecedentes investigativos pre procesales realizados por el Agente Fiscal, abogado Jorge Solórzano Ferrando, de cuyos datos, según lo ha resuelto la Sala única de la Corte Provincial de Esmeraldas, se determinaba claramente, que el hecho investigado habría ocurrido en la jurisdicción territorial de San Lorenzo Esmeraldas, lo cual pese a constar en el proceso, no fue considerado para efectos de asegurar su competencia, que es el principal deber del Juez al avocar conocimiento de una causa; obligación que no se cumplió por parte de la Abogada Zoila Alvarado, sin que se pueda admitir como fundamento la tesis absolutista esgrimida por la indicada jueza de que el Fiscal es *“el dueño absoluto del ejercicio de la acción penal”*; manteniéndose en conocimiento de la instrucción fiscal, pese a que los imputados Doris Alicia Riascos, con el defensor abogado Eduardo Reyes Lamota (fs. 8519), le advirtieron tal irregularidad procesal, para finalmente cuando el Juez de Garantías Penales de San Lorenzo, le anuncia la competencia, incumplir con lo señalado en el Art. 849 del Código de Procedimiento Civil, y en lugar de responder al Juez de San Lorenzo, cediendo la competencia o contradiciéndola, para lo cual la referida disposición legal le confiere 48 horas, con fecha 15 de abril de 2009, dicta un polémico auto inhibitorio, con lo cual dio paso a una tramitación distinta a la prevista y determinada en los Art. 849 del Código de Procedimiento Civil, todo lo cual origina un conflicto de competencia innecesario que en lugar de simplificar la

sustanciación de la instrucción fiscal y del proceso en general, se lo complicó, dilató y extendió innecesariamente, lo cual finalmente influyó en la caducidad referida; además de permitir la caducidad de la prisión preventiva de varios procesados, al inobservar disposiciones legales y constitucionales a las que estaba obligada respetar en el cumplimiento de sus obligaciones. **OCTAVO:** El Dr. Edgar Salazar Vera, Juez Décimo de Garantías Penales del Guayas, asumió la competencia de la instrucción fiscal referida en subrogación de la Jueza Ab. Zoila Alvarado, en la primera recusación propuesta por uno de los imputados. Al referido Juez, le correspondió actuar en circunstancias en que la etapa de instrucción fiscal llegaba a sus postrimerías, resultando ya evidente la intención dilatoria de algunos imputados, no advierte tal situación e incurre en negligencia grave, cuando el día 10 de diciembre de 2008, 8 días antes de concluir los 90 días de la etapa de instrucción, se presenta la primera vinculación por parte del Fiscal (fs. 8617), con lo cual la instrucción se debía haber extendido 30 días más, esto es hasta el 18 de enero del 2009. Mas ocurre que el Dr. Edgar Salazar Vera, retiene el proceso 28 días, y no provee el escrito de la primera vinculación presentado por el Agente Fiscal, y posterga su despacho para el día 7 de enero del 2009, con lo cual la instrucción fiscal, que normalmente debía concluir el 18 de Diciembre del 2008 se extiende hasta el 7 de febrero de 2009, lo que resultó vital para que se haya producido la caducidad.- **NOVENO:** El Ab. Luis Santana, asumió la competencia en el referido proceso, en subrogación de la Juez titular, por segunda recusación contra la abogada Zoila Alvarado, desde el 10 de febrero en que la ponen a su despacho, según la razón actuarial que corre a fs. 8956, hasta el 13 de marzo del 2009, (treinta y dos días), aunque en su informe que obra de fojas 706 a 707, menciona que ha sido puesto a su conocimiento el proceso por "una semana", esto es desde el 26 de febrero hasta el 2 de marzo de 2009, "siete días", lo cual queda desmentido por falta de veracidad. No despachó oportunamente el proceso cuando tenía la obligación de velar por el ágil trámite de las causas conforme a sus deberes señalados en el Art. 130 del Código Orgánico de la Función Judicial. De acuerdo con el análisis realizado, la cuarta vinculación realizada por el Agente Fiscal que extendió la instrucción fiscal hasta el 3 de marzo del 2009; de conformidad con el Art. 223 del Código de Procedimiento Penal, el Abogado Santana debió haber cumplido con la obligación de declarar concluida la etapa de instrucción fiscal y requerir para que el Agente Fiscal presente su dictamen; omisión de tal obligación, que incidió en la caducidad. **DECIMO:** A la Primera Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas, integrada por el doctor Carlos Luis Ortega Sánchez y abogados Faustino Castro Tobar y Marco Quimi Villegas,

Jueces y Conjuez permanente, en resolución de 4 de junio de 2009, le correspondió atender tanto el recurso de apelación de las ordenes de detención preventiva de algunos de los imputados, así como el recurso de apelación interpuesto por el Agente Fiscal Solórzano, para que se revoque el auto inhibitorio expedido por la Jueza Ab. Zoila Alvarado; sin resolver el asunto de fondo para el que subió en grado el proceso, ya que se limitan a señalar el error incurrido por la Jueza inferior. Por este asunto expiden un auto de nulidad, sin la debida motivación y sin señalar de qué modo la violación encontrada podía influir en la decisión de la causa, circunstancia que incide y tiene responsabilidad en la caducidad que se investiga, pues emite una resolución en la que en lugar de corregir el error que podría calificarse de semántico cometido por la Juez Cuarta de Garantías Penales y mandar el juicio al Juez de Garantías Penales de San Lorenzo, a quien le correspondía la competencia en razón del territorio, como posteriormente lo dispuso la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas. Se declara una nulidad sin señalar de qué modo el vicio procesal encontrado, podría influir en la decisión de la causa, como lo señala el Art. 331 Del Código de Procedimiento Penal, nulidad que se la declara sin que se haya cumplido con la motivación requerida, quebrantando así lo dispuesto en el literal l) del numeral 7 del Art. 76 de la Constitución de la República. Además de esta forma la Sala contribuyó en la dilatación del proceso que llevó a la caducidad de la prisión preventiva; Sala que también incurre en negligencia grave, al no pronunciarse respecto de la apelación de la orden de detención preventiva solicitada por algunos imputados, para cuya decisión el Art. 172 del Código de Procedimiento Penal, confiere cinco días; sin embargo, deliberadamente se omitió esta obligación, pese a que la revisión de la orden de detención preventiva impugnada por algunos imputados, no tenía relación con el tema de la impugnación del auto inhibitorio interpuesta por el Agente Fiscal, cuya nulidad se declaró y se utilizó como excusa para no atender la apelación de la detención preventiva interpuesta por varios imputados. **DECIMO PRIMERO:** El Abogado Galo Almeida, Juez Suplente Octavo de Garantías Penales del Guayas, interviene por excusa de la Jueza Ab. Zoila Alvarado, quien al ser sancionada por la Primera Sala de lo Penal de Guayaquil, debió separarse definitivamente del conocimiento de la causa y por sorteo le correspondió conocer al Juzgado Octavo de Garantías Penales del Guayas, en circunstancias que el Abogado Galo Almeida estaba encargado de ese despacho y a quien ante la nulidad declarada por el superior le correspondía reponer el proceso en cumplimiento de la resolución emitida por la Corte Provincial. El referido Juez es responsable de haber contribuido a que se dilate innecesariamente el proceso, pues, cuando en

aplicación de los principios de simplificación, celeridad y economía procesal consagrados en el Art. 169 de la Constitución de la República, así como por mantener la coherencia con su antecesora, lo sensato y procedente era, disponer que el proceso pase a conocimiento del Juez de Garantías Penales de San Lorenzo que reclamó la competencia y dejar constancia de aquello significaba que estaba cediendo la competencia, como lo determinó la Sala Primera de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas; pero en forma inexplicable y sorpresiva, decide dar un giro diferente al conflicto de competencia y a la inversa de lo que hizo la Abogada Zoila Alvarado, decide contradecir la competencia, con lo cual, en lugar de pasar el proceso en forma directa al Juez que entabló el conflicto de competencia, el proceso debió pasar previamente a la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, en donde se estableció que el argumento que esgrimió el Abogado Galo Almeida no tenía fundamento válido para contradecir la competencia, por lo que se ordenó que el proceso pase al Juez de Garantías Penales del cantón San Lorenzo; de lo que se concluye que el Abogado Galo Almeida, causó el desperdicio de siete días, que aunque pocos, incidieron en la caducidad producida. **DECIMO SEGUNDO:** La Sala Única de Esmeraldas, integrada por doctor Humberto Rodríguez Martínez, doctor Joel Arias Vélez y abogado Víctor Guilcapi, que asume competencia para conocer sobre el recurso de apelación y nulidad de auto de llamamiento a juicio dictado por el Juez de Garantías Penales de San Lorenzo en la Provincia de Esmeraldas, avocó conocimiento de la causa y hace conocer a las partes la recepción del proceso el día 28 de julio de 2009. Dos Jueces de la Corte Provincial de Esmeraldas, doctor Humberto Rodríguez Martínez, con el Juez doctor Joel Arias Vélez, el 8 de septiembre de 2009, han presentado escrito de excusa para atender el caso (fs. 13712), estimando que como jueces habían emitido pronunciamiento en el juicio denominado "Huracán Verde", y por cuanto de dicho juicio el Fiscal, doctor Jorge Solórzano Ferrando ha incorporado elementos de dicha investigación y en el que ha involucrado a ciudadanos que también están mencionados en el caso "Huracán de la Frontera"; excusa, que le correspondió calificar al Presidente Abogado Víctor Guilcapi como único Juez hábil, quien la niega por las razones y motivaciones expuestas en providencia de 9 de septiembre de 2009, (13714), incidente que fue resuelto con la debida celeridad y que si bien es verdad, en forma directa no produjo desperdicio de tiempo, no es menos cierto que se intentó evadir obligaciones por parte de estos dos jueces provinciales, lo que originó para que varios imputados fundamenten el mismo argumento para plantear incidentes que finalmente, influyeron en la caducidad de la prisión preventiva, conducta sancionada en la norma

establecida en el numeral 7 del Art. 108 del Código Orgánico de la Función Judicial, pues dicha excusa no fue debidamente motivada. **DECIMO TERCERO:** La Sala única de la Corte Provincial de Esmeraldas, integrada por los abogados Joel Arias Vélez, Jacinto Rivera Jiménez, Conjuez y Eugenio Jijón Guerrero, Conjuez, por segunda ocasión vuelve a recibir el proceso esta vez con el propósito de conocer y resolver el recurso de apelación y nulidad interpuesto por algunos imputados respecto del auto de llamamiento a juicio expedido por el Juez de Garantías Penales de San Lorenzo. Habiéndose sustanciado el recurso de nulidad, encontrándose la causa en estado de resolver sobre lo principal, esto es si se confirmaba, revocaba o modificaba el auto de llamamiento a juicio. Concluida esta etapa de impugnación, el proceso debía pasar al Tribunal de Garantías Penales para expedir sentencia, con cuyo requisito no opera la caducidad de la detención preventiva. En estas circunstancias, se cumple el primer año de vigencia de las detenciones preventivas, que deciden acogerse al beneficio de la caducidad y se produce este nuevo incidente que no debió haber impedido que se expida la resolución sobre lo principal, sin embargo los Jueces Provinciales, abogados Joel Arias Vélez, Jacinto Rivera Jiménez, Conjuez y Eugenio Jijón Guerrero, Conjuez, mediante resolución de 22 de octubre de 2009 a las 08h30, pese a que según la razón actuarial de fojas 13858 vta., realizaron la relación del proceso y que estaban habilitados para expedir el fallo sobre lo principal, se limitaron a resolver únicamente el incidente relativo a la caducidad de la detención preventiva, omitiendo pronunciarse sobre los recursos de apelación y nulidad por cuyo motivo llegó el proceso a conocimiento de ese Tribunal, lo que deja de manifiesto que los referidos jueces provinciales incurrieron en falta de despacho incumpliendo uno de los deberes establecidos en el numeral 2 del Art. 100 del Código Orgánico de la Función Judicial, que los obliga a ejecutar las funciones de sus puestos con diligencia, celeridad, eficiencia, lealtad e imparcialidad; incurriendo en la falta establecida en la causal 5 del Art. 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como en la causal 8 del Art. 108 ibídem, pues al hacer la relación del proceso, si se hubiese actuado con diligencia, celeridad y eficiencia, debió haberse expedido el pronunciamiento definitivo que le correspondía emitir a ese tribunal, sin embargo, solo se pronunciaron respecto del incidente de caducidad de las detenciones preventivas, sin expresar el fundamento y el motivo por el cual no se emitió pronunciamiento sobre lo principal. **DECIMO CUARTO:** Mediante dos recusaciones en contra de la Jueza titular del Juzgado Cuarto de Garantías Penales, consta: **a)** Copia de la demanda planteada por Doris Riascos, con el auspicio del abogado Eduardo Reyes Lamota, Mat. 5776 Colegio de

Abogados del Guayas (fs. 8519); **b)** Copia de la boleta de citación con la demanda de recusación planteada ante el Juez Decimo Quinto de lo Penal del Guayas, por parte de Rodolfo Amburgo Coloma (fs. 8922) quien ha comparecido a juicio, con el abogado Jaime Lucio Rivera Endara, como su defensor, que intentaron y consiguieron obstaculizar el trámite judicial alegando mora en el despacho que no pudieron justificar, por lo que se rechazaron tales acciones que más que tener el propósito de separar definitivamente a la Juez titular, tenían la consigna de confundir y entorpecer con acciones a las que se les puede calificar como de mala fe procesal, acciones que indiscutiblemente obstaculizaron el desenvolvimiento normal del proceso y que podían constituir infracciones punibles contra la actividad judicial, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 296 del Código Penal; por lo que debe investigarse tal hecho conforme al inciso segundo del Art. 174 de la Constitución de la República en concordancia con el Art. 26 del Código Orgánico de la Función Judicial.-

DECIMO QUINTO: El Fiscal, habría incurrido en dos errores inexcusables, que indudablemente han incidido en la caducidad como definitivamente lo determinó la Sala única de la Corte Provincial de Esmeraldas: a) haber presentado la instrucción ante juez incompetente en función del territorio; y, b) interponer recurso de apelación, del auto inhibitorio, que si bien era apelable, resultaba inconveniente para el sistema judicial, pues debió prever que produciría un incidente que conducía a dilatar el proceso que incidió en la caducidad.

DECIMO SEXTO: El Secretario de la Corte Provincial de Esmeraldas, doctor David Valencia Rosales, no tiene responsabilidad en la caducidad, pero sí en el incumplimiento de lo determinado en el inciso cuarto del Art. 169 del Código de Procedimiento Penal, esto es no haber remitido de manera inmediata el expediente completo al Consejo de la Judicatura, por lo que incurrió en la falta establecida en el numeral 6 del Art. 107 del Código Orgánico de la Función Judicial.

DECIMO SEPTIMO: En las actuaciones de los señores: Abogados, Víctor Guilcapi Camacho, Juez de la Corte Provincial de Esmeraldas, así como de la Abogada Dora Vargas Troncoso, Secretaria del Juzgado Cuarto de Garantías Penales del Guayas, no se demuestra que hayan infringido alguna disposición administrativa que merezca sanción disciplinaria.-

DECIMO OCTAVO: De fojas 650 a 662, constan los registros de los antecedentes disciplinarios de los servidores sumariados, en donde se observa que la abogada Zoila Alvarado Moncada, ha sido amonestada por escrito en el expediente No. OF-310-07, con fecha 7 de enero de 2009; el doctor Luis Ortega Sánchez, ha sido multado con el 5 % de su remuneración mensual en el expediente No. OF-45-08; el abogado Edgar Salazar Vera, ha sido sancionado con Amonestación, en los expedientes

Nos. 346-00-CG, 351-01-J, 378-02R y 150-00; suspendido por 30 días sin remuneración en el expediente No. 289-05DG; el abogado Luis Santana Benavidez, ha sido amonestado en el expediente No. OF-209-04 y suspendido por 20 días sin remuneración, en el expediente No. 303-05-DG; el abogado Galo Almeida Tapia, ha sido sancionado con multa de tres SBU en el expediente 370-07. De fojas 664 a 677, constan las acciones de personal certificadas y actualizadas por la Dirección de Personal.- Por las consideraciones mencionadas anteriormente y del análisis de los recaudos procesales que forman parte de este sumario administrativo, se establece de manera categórica, que la actuación de varios de los servidores sumariados, conforme consta de la presente resolución, bajo cuya responsabilidad se encontraba el trámite y conocimiento del juicio penal que origina este expediente, son responsables de la caducidad producida por no haber actuado con apego a la obligación que tenían de agilizar el proceso, sin prestarse para el retardo ocasionado a través de providencias y actuaciones que afectaron el ágil trámite que debía darse a un asunto penal de trascendencia en la sociedad, dadas las implicaciones producidas, pues tratándose de un hecho de alta peligrosidad como la tenencia ilegal y tráfico de cuatro y media toneladas de droga, que trascendió con escándalo inclusive fuera del país, lo que demuestra que en su calidad de servidores de la Función Judicial no cumplieron eficientemente con sus obligaciones, ni aplicaron imperativamente los Principios de Responsabilidad, Celeridad, Probidad, Seguridad Jurídica, Buena Fe y Lealtad Procesal, que constan del Código Orgánico de la Función Judicial y demás normas procesales, afectando con su actuación la sociedad e imagen de la Administración de Justicia y del país en temas tan delicados y que permanentemente reclama la sociedad a la Institucionalidad pública; razones estas por las cuales, **EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA**, De conformidad con lo dispuesto en los numerales 7 y 8 del Art. 108, y numerales 1), 2) y 5) del Art. 110 Ibidem que habla de las circunstancias constitutivas de las infracciones, **Resuelve: a) DESTITUIR** a los abogados: *Zoila Alvarado Moncada, Edgar Salazar Vera, Luis Santana Benavidez, Galo Almeida Tapia*; en sus calidades de Jueza del Décimo Tribunal de Garantías Penales, Juez Décimo de Garantías Penales, Juez Segundo de Garantías Penales y Juez Suplente Octavo de Garantías Penales todos del Guayas; abogados *Carlos Luis Ortega, Marco Quimi Villegas y Faustino Castro Tobar*; Juez, Conjuez y Tercer Conjuez respectivamente, de la Primera Sala de Garantías Penales del Guayas, por las razones expuestas en los Considerandos, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo y Décimo Primero de esta resolución, por haber adecuado su conducta disciplinaria a la causal establecida en el numeral 7 del Art. 108

en concordancia con los Arts. 110, numerales 1), 2) y 5) y 125 del Código Orgánico de la Función Judicial: **b) SUSPENDER POR TREINTA DÍAS**, sin goce de remuneración a los Abogados *Humberto Rodríguez Martínez* y *Joel Arias Vélez*, Jueces de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas por haber adecuado su conducta a la causal establecida en el numeral 7 del Art. 108 del Código Orgánico de la Función Judicial y por las razones establecidas en el Considerando Décimo Segundo de esta resolución; **c) SUSPENDER POR QUINCE DÍAS** sin goce de remuneración, a los Abogados *Jacinto Rivera Jiménez* y *Eugenio Jijón Guerrero*, Conjueces de la Corte Provincial de Esmeraldas, por no haberse pronunciado sobre lo principal y solamente dictar el auto de caducidad de la prisión preventiva de los procesados, adecuando su conducta a la causal contenida en el numeral 8 del Art. 108 del Código Orgánico de la Función Judicial y por lo indicado en el Considerando Décimo Tercero de esta resolución; **d)** De conformidad con el numeral 6 del Art. 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, **MULTAR** al doctor *David Valencia Rosales*, Secretario de la Corte Provincial de Esmeraldas, con el 10 % de la remuneración a la que tiene derecho, por haber infringido la disposición legal establecida en el inciso cuarto del Art. 169 del Código de Procedimiento Penal y por lo manifestado en el Considerando Décimo Sexto de esta resolución; **e) ABSOLVER:** A los abogados *Víctor Guilcapi Camacho*, Juez de la Corte Provincial de Esmeraldas, así como a la Abogada *Dora Vargas Troncoso*, Secretaria del Juzgado Cuarto de Garantías Penales del Guayas, hoy Jueza del Tercer Tribunal de Garantías Penales del Guayas. **f)** De conformidad con lo establecido en la Décima Segunda Disposición Transitoria del Código Orgánico de la Función Judicial, remitir a la Fiscalía General del Estado, copias certificadas de las piezas procesales respectivas, así como de la presente resolución, para que se inicien las acciones disciplinarias, de inmediato, por la actuación del Fiscal abogado Jorge Solórzano Ferrando, en el proceso en el que se produjo la caducidad de la prisión preventiva, de conformidad al contenido del Considerando Décimo Quinto de esta Resolución; **g)** Respecto de los procesados que presentaron los juicios de recusación, se dispone oficiar a la Fiscalía, por las presunciones de haber adecuado su conducta a la norma establecida en el Art. 296 del Código Penal; en lo referente a sus abogados patrocinadores, por encontrarse sujetos a la correspondiente acción disciplinaria, por presumirse la mala fe procesal, por no existir Director Regional del Consejo de la Judicatura, se dispone que el Director Provincial de Guayas, inicie el sumario correspondiente de conformidad a las normas establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial, por lo manifestado en el Considerando Décimo Cuarto de esta resolución; **h)** Remitir a la Fiscalía General del

Estado, copia certificada de este expediente, a fin de que se inicien las acciones penales a que hubiera lugar, a fin de determinar el posible cometimiento de delitos de acción pública, entre ellos el de prevaricato, por la actuación de los servidores de la Función Judicial involucrados en este sumario.- Para el cumplimiento de lo resuelto, se oficiará a las Direcciones Nacionales de Personal y Financiera del Consejo de la Judicatura, así como a las Direcciones Provinciales de Guayas y Esmeraldas. Se previene a los servidores sancionados lo dispuesto en el Art. 238 del Código Penal.- Actúe la Secretaria de la Unidad de Control Disciplinario, para la notificación y ejecución de esta Resolución.- **Notifíquese.-**

Dr. Benjamín Cevallos Solórzano
Presidente del Consejo de la Judicatura

Dr. Ulpiano Salazar Ochoa
Vicepresidente

Dr. Herman Jaramillo Ordóñez
Vocal

Dr. Jorge Vaca Peralta
Vocal (Abstención)

Dr. Oswaldo Domínguez Recalde
Vocal

Dr. Homero Tinoco Matamoros
Vocal

Dr. Víctor Hugo Castillo Villalonga
Vocal

Dr. Germán Vázquez Galarza
Vocal

Dr. Gustavo Donoso Mena
Secretario Encargado